

ZAMARRIPA

➡ Si los gobernantes se desentienden de los ciudadanos crece la desesperanza.

Llegó el momento de dar el siguiente paso y ajustar la labor de la ciudadanía.

TOLVANERA

Seguridad ciudadana

ROBERTO ZAMARRIPA

El día que el empresario Alejandro Martí recibía en nombre de su hijo asesinado un diploma de parte del gobierno que no ha cumplido con la respuesta al reclamo ciudadano de inseguridad, a la familia Vargas Escalera le entregaban el cadáver de Silvia, una muchacha arrancada de las manos de sus padres y amigos por la impune sociedad del crimen.

Los extremos parecen normalidades. Hoy se clama no por evitar los plagios sino por que sean entregados a sus familiares los cadáveres de las víctimas.

Es el país de las coronas fúnebres, de los rezos y responsos, de las cenizas atoradas y lloradas, tras las fechorías delincuenciales mientras los policías de élite, los presumidos como los supermanes de los controles de confianza, resultan de ralea mafiosa y transitan impunes ante la omisión e ineficiencia de sus jefes.

Los vasos comunicantes de gobernantes y ciudadanos están taponados, atascados por la espantosa impunidad; los teléfonos de denuncia anónima son contestados por los soplonos de los criminales; las direcciones antisecuestro son controladas por los socios de los plagiarios; la jefatura antinarco son administradas por los amigos de los capos; los operadores de los polígrafos son sobornados para cambiar resultados de los exámenes y la carpa de simulación se extiende sobre los altos funcionarios de gobierno que dicen sorprenderse ante las atrocidades de sus subordinados.

Alejandro Martí reclama el si no pueden renuncien y no recibe dimisiones sino un diploma. Isabel Wallace se desgañita en reclamos colocados en las azoteas y retuena un eco de silencio. Nelson Vargas exclama que no tienen madre y su mentada no mueve a la autoridad sino "commue-

ve" a un criminal que confiesa su fechoría para decir dónde quedaron los restos de Silvia.

¿Y si los ciudadanos se deciden a colaborar dentro de las estructuras de gobierno? Bueno, los corren como si estorbaran.

En Tijuana parecía haber una combinación extraordinaria de poderes: el político, el militar y el ciudadano. Un alcalde electo por el voto popular de filiación panista, Jorge Ramos. Un líder de la protesta ciudadana contra la delincuencia colocado como secretario de Seguridad, Alberto Capella. Y un teniente del Ejército puesto como jefe operativo de la seguridad, Julián Leyzaola. Podía ser un ideal de articulación. Pero el político piensa en la próxima elección con lo que ello implica: imagen, o lavado de la misma, y búsqueda de dinero para el financiamiento de la campaña. Quitará lo que afecte ese propósito. El militar piensa en la próxima medalla por la contundencia de su golpe; piensa en el ascenso y se desespera ante los tiempos de la justicia civil. El ciudadano piensa en la presión de los suyos sin el cálculo político de a quién afecto ni el cálculo militar de la estrategia.

Todos -políticos, militares y ciudadanos- nadaban en medio del fétido mar de la corrupción en el que flotaba el aparato de seguridad pública en Tijuana, una de las ciudades con los mayores índices de violencia, de plagios y de ejecuciones de mafiosos.

Tras un año de labor Capella fue despedido en silencio. La fetidez sigue. El gobierno de Tijuana no ha explicado la circunstancia. Tampoco el estatal de Baja California. La articulación de tres vertientes clave en la defensa de la seguridad y paz de los ciudadanos fue imposible en Baja California.

Igual removieron al general Sergio



Fecha 15.12.2008	Sección Primera - Opinión	Página 21
----------------------------	-------------------------------------	---------------------

Aponte, quien fungió como jefe de la Segunda Zona Militar con sede en Mexicali y que se distinguió, entre otras cosas, por romper la tradicional discreción declarativa de los jefes castrenses para revelar con crudeza las complicidades de policías y funcionarios públicos.

Capella era un funcionario público acostumbrado a relacionarse con los medios. Desde su liderazgo ciudadano sabía que si no trasladaba a la revelación pública las atrocidades delincuenciales no habría eco a sus denuncias. No tenía por qué variar esa conducta en la administración pública. Pero al igual que Aponte, molestaba "su protagonismo".

Los políticos creen tener un monopolio de la tribuna pública. Si otros, militares o ciudadanos, invaden ese coto, no sólo exhibirán la pobreza declarativa y racional de los políticos sino que les desplazarán en las preferencias ciudadanas.

Cuando la fractura es de esas dimensiones –gobernantes desentendidos de los ciudadanos– crece la decepción y campea la desesperanza. Es momento de que los ciudadanos distinguidos (Martí, Wallace, Vargas, Capella), los anónimos agraviados, los poco participativos, los que votan y se abstienen, revisen a su modo las maneras de vigilar y controlar a los gobernantes y a sus policías.

Las marchas suenan y condenan; los observatorios atisban y advierten; las fundaciones marcan y dotan de insumos informativos para actuar. Pero tal parece que eso no es suficiente. Lo peor sería convertirse en voceros o tapaderas de los funcionarios que incumplen. Esos ciudadanos distinguidos han hecho mucho, han sembrado. Seguramente provocarán una nueva respuesta.

Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx